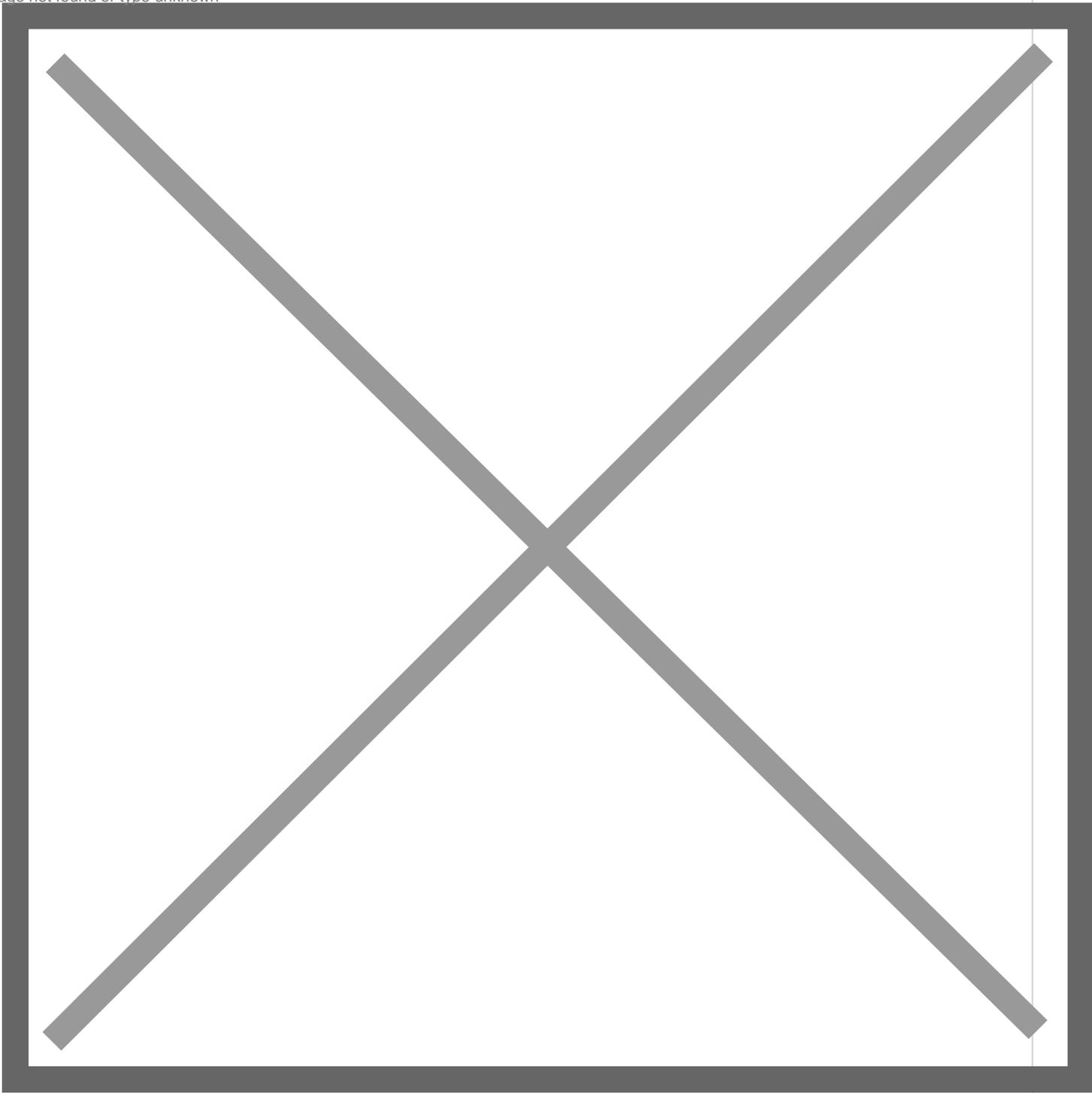


Arévalo contra esfuerzo político y judicial corrupto

Image not found or type unknown



Por Roberto Morejón

El presidente electo de Guatemala, Bernardo Arévalo, pugna en dos frentes, uno para atenuar los embates de la fiscalía contra su persona y partido, Movimiento Semilla, y otro con el fin de asegurar la toma de posesión el 14 de enero venidero.

El político insistió desde su campaña electoral hasta hoy que en Guatemala rige lo que denominó “pacto de corruptos”.

No son Arévalo y sus seguidores los únicos que han denunciado esa alianza entre políticos, diputados y empresarios acusados de promover la impunidad.

Sectores sociales y personalidades coinciden en que a la cabeza de ese pacto deshonesto figura la fiscal general Consuelo Porras.

Esta última y dos jueces organizaron una cruzada contra los ganadores de los comicios de este año en Guatemala, donde no se esperaba el triunfo de un candidato como Arévalo, no proveniente de la extendida rancia derecha.

Arévalo sostiene que en su país rigen narcoalcaldes y narcodiputados como evidencia de la penetración del narcotráfico en los diferentes niveles de gobierno.

En su argumentación, el primer mandatario electo, quien derrotó en las urnas en segunda vuelta a una candidata de derecha, destaca que en el sistema político se organizan para saquear al Estado.

Las posturas del sociólogo y ex diplomático de 65 años han removido a las élites, desde donde vieron con irritación las manifestaciones públicas y cortes de carreteras, en demanda de respeto a la democracia, a los resultados de los comicios y a favor de la renuncia de la fiscal general Porras.

Precisamente, el presidente electo aguarda porque la magistrada renuncie, porque de lo contrario podría proseguir la embestida judicial contra funcionarios gubernamentales.

NO obstante, pese al calado de la crisis política, Arévalo estima inevitable su asunción en enero, sobre todo desde que la Corte de Constitucionalidad ordenó al Congreso elegir a los magistrados que habían prolongado su mandato.

Esos jueces deberán permanecer en el cargo hasta fines de 2024 cuando deben elegirse a sus sustitutos, quienes pudieran ser más razonables.

En medio de tales sobresaltos, Arévalo promete formar un equipo ministerial con personas calificadas por su capacidad, experiencia y honestidad y no por afiliación partidista.

Y confía en que los pueblos originarios se erijan en actor esencial para velar por un sistema democrático amenazado por el pacto de corruptos.



Radio Habana Cuba